
La solución

La adjudicación del proyecto de la planta desaladora para nuestra región a la empresa Sacyr marca, sin duda, un hito en la forma en que el país enfrenta la crisis hídrica. Con una inversión de US\$318 millones, esta iniciativa no solo representa una solución técnica, sino también una apuesta política por cambiar el paradigma del acceso al agua en la zona norte.

Sin embargo, más allá del entusiasmo que generan este tipo de anuncios, es necesario analizar con cautela el alcance real de la desalación como respuesta estructural. Si bien transformar el agua de mar en recurso utilizable parece una alternativa lógica en zonas golpeadas por la sequía, también implica altos costos energéticos, impactos ambientales y una fuerte dependencia de infraestructura compleja.

Apostar por la desalación como eje central podría invisibilizar otras soluciones igualmente urgentes, como la gestión eficiente del recurso, la protección del medio ambiente o la modernización del riego.

El discurso oficial, encabezado por el Ministerio de Obras Públicas, plantea que «la próxima década debe ser la década de la desalación». Pero esta afirmación abre una pregunta clave: ¿quién se beneficiará realmente de esta agua? Se habla de consumo humano y uso multipropósito, esperamos que las comunidades locales que enfrentan escasez día a día sean las principales favorecidas con este nuevo proyecto y después de satisfacer esa necesidad se dé paso a otros propósitos como la minería o la industria.

El desafío no es solo construir una planta desaladora, sino asegurar que su impacto sea equitativo, transparente y sostenible en el tiempo. La generación de empleo y el desarrollo de infraestructura son aspectos positivos, pero no pueden ser el único criterio de evaluación. La crisis del agua exige soluciones integrales, donde la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés.